



Organización de los
Estados Americanos



OAS/Ser.L/XXV.2.1
GT/PSS/doc.13/16

**Examen de los Informes presentados por los Estados Partes al Primer
Agrupamiento de Derechos del Protocolo adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador” (arts. 9, 10 y 13)**

**OBSERVACIONES FINALES AL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

3º Período de Sesiones
Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales
previstos en el Protocolo de San Salvador
Washington, D.C., 3-6 de mayo 2016

I. Introducción

1. El Estado Plurinacional de Bolivia ratificó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, el 30 de junio de 2003. Se destaca especialmente que el país, a través de la representación ante la OEA, ha participado activamente en el proceso de definición de los indicadores de progreso para medir el cumplimiento de este importante Tratado de Derechos Sociales. Asimismo el Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador (en adelante, GT, Grupo de Trabajo o GTPSS) agradece al Estado Plurinacional de Bolivia su disposición para responder los indicadores solicitados y destaca que ha cumplimentado los pasos formales previstos Documento *Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador* (OEA/Ser.L/XXV.2.1; GT/PSS/doc.2/11 rev.2) que fue aprobado en el marco de la Asamblea General de la OEA, en junio 2012 (AG/RES 2763, XLLII-0/12) y que dan cumplimiento a lo previsto en el artículo 19 del Protocolo.

2. El GT examinó los dos informes remitidos por parte el Estado Plurinacional de Bolivia correspondientes al primer agrupamiento de derechos en sus 1° y 2° período de sesiones, celebrados el 24 a 26 de febrero y 14 a 16 de octubre de 2015, celebró la audiencia con el Estado parte el 3 de noviembre de 2015 y en el 3° período de sesiones celebrado entre 3 al 6 de 2016 aprobó las siguientes observaciones finales.

3. Las Observaciones Finales sintetizan los resultados del proceso de monitoreo en materia de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el primer agrupamiento de derechos: derecho a la salud (art. 10 PSS), derecho a la seguridad social (art. 9 PSS) y derecho a la educación (art. 13 PSS) en los dos informes remitidos por el Estado Plurinacional de Bolivia, el primero de carácter preliminar y el segundo de carácter definitivo (MPB-OEA-NV 216-2015; 11/9/2015).

4. El GT reafirma que el sistema de informes a través de indicadores de progreso buscan: “*estimular en los Estados un proceso de evaluación y de medición de cumplimiento de derechos sociales que trascienda la idea de mero reporte, sino que se convierta en un instrumento útil para el diseño y evaluación permanente para las políticas públicas al interior de los Estados tendientes a asegurar el cumplimiento del conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales*” (párr. 9 Documento Indicadores, OEA/Ser.L/XXV.2.1; GT/PSS/doc.2/11 rev.2).

5. El GT agradece especialmente al Estado Plurinacional de Bolivia el proceso desarrollado y felicita al Estado por haber cumplimentado el proceso correspondiente al primer agrupamiento de derechos. Observa con satisfacción el formato del informe, que hace referencia a las observaciones preliminares remitidas por el GT, celebra la calidad del diálogo constructivo que mantuvo en la audiencia con el Sr. Embajador acreditado ante la OEA y la delegación durante la audiencia pública celebrada en la sede de la OEA, como también las respuestas dadas a las diversas preguntas formuladas, y la predisposición para consolidar el proceso iniciado en torno a la implementación de indicadores de progreso. Se reitera la necesidad de responder los indicadores que no han sido consignados en los informes remitidos por el Estado parte y que en futuros informes se requiere que el Estado pueda informar. Al respecto, en Anexo de este Documento se listan los indicadores solicitados.

II. Consideraciones generales del proceso/informes

6. El Grupo de Trabajo desea sintetizar diversos elementos señalados en los documentos metodológicos sobre la importancia del proceso de informes:

- **La generación de indicadores para los informes proporciona elementos para diseñar y evaluar las políticas para el avance de los derechos humanos:** *“Los objetivos principales de los indicadores (...) buscan contribuir a que los Estados Parte cuenten con herramientas útiles para realizar un diagnóstico de la situación de los derechos contenidos del Protocolo, establecer los temas y las agendas pendientes a partir de un diálogo participativo con la sociedad civil, y formular estrategias para satisfacer progresivamente el programa de derechos contenido en el Protocolo. Se busca estimular en los Estados un proceso de evaluación y de medición de cumplimiento de derechos sociales que trascienda la idea de mero reporte, sino que se convierta en un instrumento útil para el diseño y evaluación permanente para las políticas públicas al interior de los Estados tendientes a asegurar el cumplimiento del conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales.”* (Doc. Ind. Parr. 9).
- **Los procesos para la elaboración de los informes, deben considerar la participación de la sociedad civil y el establecimiento de metas de avance en la agenda de los derechos humanos.** *“Uno de los aspectos imprescindibles para iniciar el proceso previsto, es la fijación de objetivos y metas prioritarias por parte de cada Estado, las que deben ser definidas a partir de una estrategia o plan de realización, acordes con un período de tiempo y mediante un proceso de discusión, debate y consenso con los diferentes actores políticos y sociales de cada Estado, contando con un cronograma detallado que permita la supervisión del cumplimiento de los objetivos propuestos (...) El diálogo social y político que puede desencadenar el proceso de elaboración de los informes y su supervisión será un hecho apreciable en si mismo considerado como estrategia de garantía de los derechos sociales en los Estados Parte. Cabe destacar que se trata de un proceso paulatino, que se irá perfeccionando con el tiempo y el curso que se le imponga al mismo, sin embargo se valora especialmente la voluntad que manifiesten los Estados para efectivizarlo”* (Doc. Ind. Parr. 12).
- **Es fundamental la inclusión de indicadores con enfoque transversal.** *“Equidad de género, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidades- diversidad étnica y cultural –en particular pueblos indígenas y afrodescendientes, y la incidencia de la sociedad civil en la formulación de avances legislativos y políticas públicas”* (Doc. Parr. 11). Es de suma relevancia considerar, dadas las cláusulas constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia, en relación con la prohibición de discriminación, que incluye orientación sexual e identidad de género.
- **Utilización de los indicadores en la evaluación de la situación de los DESC.** Los indicadores de progreso constituyen herramientas útiles para los Estados en la medida en que se asuma que se trata de aproximaciones múltiples al estado de realización de los DESC, en el marco de las obligaciones contempladas en el Protocolo de San Salvador. En la medida que no sean considerados de manera

aislada sino en sus múltiples vinculaciones, debido a que los indicadores no reflejan una correspondencia lineal entre el grado de realización/avance en la garantía de los DESC y el nivel de cumplimiento estatal de sus obligaciones, se podrá interpretar y dar evidencia respecto del grado de avance del cumplimiento de derechos. En concordancia, la evaluación debe interpretarlos en su conjunto.

- **Construcción de indicadores para los informes.** Aun cuando la resolución AG/RES. 2713 (XLII-O/12) señala que la aprobación del documento *Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador. Primer agrupamiento de derechos*, se realiza bajo “el entendido de que se trata de pautas y criterios a los Estados parte, los cuales estarán en condiciones de adecuarlos a las fuentes de información a su disposición para cumplir con lo dispuesto en el Protocolo”, el Grupo de Trabajo destaca la importancia de que los Estados Parte vayan proveyendo los medios para calcular todos los indicadores, considerando la recolección de la información pertinente, así como la ampliación de muestras que permitan el cálculo de los desagregados necesarios, asegurando los recursos para contar con flujos permanentes de información actualizada.
- **Desagregación de datos.** Se recuerda a los Estados partes del PSS que es necesario que presenten la información con el mayor grado de desagregación posible. Significa que las fuentes de información deben prever la posibilidad de clasificar la información por sexo, incluyendo consideraciones de género y orientación sexual, condición de migrante, edad (en caso de rangos de edad consignar los utilizados por el sistema estadístico nacional), área de residencia: localidades urbanas y zonas rurales, de acuerdo con los clasificadores nacionales (Nº de habitantes por municipio/localidad), nivel socioeconómico: de acuerdo a los clasificadores nacionales. Otra opción posible es considerar la distribución de ingresos de los hogares por quintiles. En el caso de las pertenencias étnicas consignar datos vinculados a pueblos originarios, por grupos lingüísticos o las formas adoptadas por el país. En el caso de los afrodescendientes consignar de la misma manera. Las personas con discapacidad, en la medida de lo posible, el tipo de discapacidad (física, mental, sensorial, entre otras), a partir de la utilización, preferentemente, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF-OMS-OPS). La desagregación en raza no es en sentido discriminatorio, como señala el Estado Parte en su informe, sino en el sentido de los clasificadores internacionales y estadísticos, dotando de un sentido positivo y en el marco del respeto.

7. Bajo estos presupuestos, el GT subraya que el Estado de Plurinacional de Bolivia ha desarrollado en sus informes las categorías transversales vinculadas con la recepción de los derechos a la salud, seguridad social y educación, y recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para adoptar medidas concretas y efectivas necesarias para garantizar la totalidad de derechos reconocidos en el Protocolo de San Salvador. Asimismo el GT alienta al Estado a dar cumplimiento al próximo proceso de presentación de informes correspondientes al segundo agrupamiento de derechos: derechos laborales y sindicales, derecho a la alimentación adecuada, derecho al medio ambiente y derechos culturales (AG/RES 2823, XLIV-0/14) previsto para junio de 2016.

8. El GT destaca como una actividad positiva por parte del Estado Plurinacional de Bolivia el haber realizado una alianza estratégica entre el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Estadística (INE), y la validación de 315 indicadores para seis derechos priorizados, entre los que se encuentran los derechos a la Salud y Educación. El GT toma nota que el Estado parte ha rectificado, en el informe complementario, que son nueve los derechos priorizados y que se está trabajando en la incorporación de nuevos indicadores, a lo que sugiere que se consideren especialmente los indicadores previstos para monitorear el cumplimiento del Protocolo de San Salvador, y de ese modo completar las próximas rondas de evaluación.

9. La incorporación en el trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el trabajo concreto en indicadores de Derechos Humanos es altamente ponderado por el GT, en tanto han adoptado –de la mano de las recomendaciones y asistencia técnica de Naciones Unidas, especialmente la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, la metodología y el cálculo en indicadores de progreso. A ello se suma la disponibilidad y fácil acceso (<http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh>) junto con la presencia de fichas técnicas y la disponibilidad de muchos de esos indicadores. El GT hace votos para que en dicha matriz, se incorporen los indicadores de progreso previstos en el Protocolo de San Salvador, de modo de conjugar ambas metodologías y avanzar en procesos de evaluación permanente.

10. El GT toma nota del reconocimiento por parte del Estado Plurinacional de Bolivia del impedimento de presentar toda información solicitada sistematizada, debido a que se encuentra dispersa o bajo diferentes parámetros, reconoce el esfuerzo realizado por el Estado parte para presentar oportunamente el informe y lo insta a que pueda desarrollar, para futuros informes, los indicadores que no se pudieron incorporar en los dos informes del primer agrupamiento (listados en el Anexo de este documento). Especialmente recomienda que se avance en la producción de información estadística, de modo de dotar de evidencia empírica que de cuenta del grado de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.

11. De los dos informes presentados por el Estado Plurinacional de Bolivia no siempre se desprende con claridad cuáles son las fuentes de donde se extrajeron todos los datos, se solicita su inclusión ya que solo en la medida que se consignen dichas fuentes permitirá verificar la información presentada. En líneas generales las fuentes de información proporcionadas por el Estado son del año 2010 y del año 2012, en consonancia con la sugerencia del GT de tomar datos del año 2010 en adelante, de acuerdo con la disponibilidad. El GT conoce las dificultades que tienen los Estados para generar información y recuerda al Estado parte que es necesario sostener y aumentar los esfuerzos para tener información actualizada, desagregada y disponible.

12. El GT acoge con satisfacción la recomendación formulada por el Estado Plurinacional de Bolivia de desarrollar una Guía para la elaboración de informes, donde se indique los requerimientos técnicos para el cálculo de indicadores. El GT señala que se encuentra trabajando en la misma, y reitera la disponibilidad que ha tenido y sostiene para proveer de asistencia técnica en la medida que un Estado parte lo requiera. Por otra parte recuerda la necesidad de contribuir activamente al sostenimiento de las actividades del GT.

13. Participación de la sociedad civil en el proceso de informes como también en el diseño de un plan de desarrollo: el informe presentado por el Estado Plurinacional de Bolivia no ha proporcionado información concreta sobre la participación de la sociedad civil en las normas, planes, proyectos y en el proceso de elaboración del informe, en particular de poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que requieren atención prioritaria, como niños, niñas y adolescentes (NNA), personas con discapacidades, mujeres o población indígena. El Estado parte ha consignado que se ha trabajado en el Plan “Agenda Patriótica 2025” donde se incluyen 13 pilares construidos de manera participativa con los municipios y localidades y manifiesta un ambicioso plan que logrará *“anular los desequilibrios, se desarrollan capacidades, se erradica la extrema pobreza y se universalizan los servicios básicos”* (parr. 14, segundo informe). Asimismo el Estado parte señala que por imperio de la Ley 341 de participación y control social de 2013, donde se define que *“la participación es un derecho, condición y fundamento de la democracia”* y *“el control social como un derecho constitucional”*. Sin embargo, el GT advierte que el Estado parte no ha presentado datos específicos sobre el efectivo control ciudadano *“del trabajo de las instancias gubernamentales”*, ni qué uso se ha dado a esta ley, por parte de que organizaciones de la sociedad civil y que grado de receptividad ha tenido. Se recomienda a futuro, dada la relevancia de este tipo de iniciativas participativas de la sociedad civil, que el Estado parte presente datos concretos de las acciones realizadas.

14. La progresividad en los indicadores y en la determinación de metas: En la importante información suministrada por el Estado Plurinacional de Bolivia, se han proporcionado los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El GT recupera y renueva la importancia que el Estado pueda determinar la posibilidad de un plan de relevamiento de información, con fechas y metas específicas de cumplimiento, en las que se pueda contar con los indicadores que no se pudo informar y también sobre las metas, de tal forma que se pueda medir de forma más adecuada la progresividad de los derechos, y el GT pueda en el año 2019 comparar y evaluar en función de dichas metas.

15. El GT reitera que ha recogido las normas aprobadas por la Asamblea General en el sentido de considerar que *“el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, entendiéndolo por ello la adopción de una política pública que considere a los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos cuya realización completa en general no puede darse rápidamente y que por ello requieren de un proceso durante el cual cada país avanza con distintos tiempos hacia el logro de la meta. Este principio invalida las medidas regresivas, salvo casos extremos justificables, y descalifica la inacción.”* El Estado parte ha respondido a partir de mencionar las cláusulas constitucionales que reconocen derechos, en especial de los pueblos indígenas, de la madre tierra, de diversidad sexual y con perspectiva de género, señalando además la promulgación de 55 normas para garantizar dichos derechos. El GT celebra este reconocimiento constitucional y alienta al Estado a que presente mayor detalle del cumplimiento de dichas obligaciones contenidas en los derechos, a partir de la totalidad de los indicadores solicitados.

16. Transversalidad de derechos: el Estado Plurinacional de Bolivia ha realizado esfuerzos importantes en generar información transversal, en particular en cuanto al derecho a la educación. Sin embargo, existe aún la necesidad de desglosar los indicadores en función de equidad de **género, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidades, migrantes, diversidad étnica y cultural** –en

particular pueblos **indígenas y afrodescendientes, orientación sexual e identidad de género**. A esta observación el Estado parte ha respondido sobre los valores que sustentan la no discriminación, pero no se han traducido en datos concretos que efectivamente den cuenta del enfoque transversal, tanto en la política pública como en la información y en los indicadores.

17. A continuación, el GT presenta sus observaciones y recomendaciones finales luego de concluido el análisis de cada uno de los derechos informados, en el entendido que se trata del primer esfuerzo sistemático de evaluación a través de indicadores de progreso que asume el Estado parte y que establecen la línea de base, sobre la cual se evaluarán los próximos informes correspondientes a estos derechos, una vez concluidas las evaluaciones de los dos primeros agrupamientos, junio 2014 y junio 2016 respectivamente, a partir de la remisión del informe por ambos agrupamientos, previsto para junio 2019. Se debe considerar que el informe preliminar y el actual del GT se complementan, y salvo en los casos en que los Estados han presentado la información complementaria, se mantienen las recomendaciones del informe preliminar a los efectos de no reiterar lo ya señalado.

III. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL (ART. 9 PSS)

Recepción del derecho

18. El GT felicita al Estado Plurinacional de Bolivia por haber ratificado los Pactos y Tratados Internacionales en materia de DESC (PIDESC, CEDAW, Convenio 102 de la OIT, Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1957 y su Protocolo de 1967, la Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención internacional sobre la protección de todos los trabajadores migrantes y sus familias, ha firmado la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), y el reconocimiento constitucional del derecho a la seguridad social y leyes especiales.

19. El GT celebra la derogación de un conjunto de normas incompatibles con el PSS y con los instrumentos internacional de derechos humanos, tales como las normas que disponían la libre contratación (Art. 55 del Decreto Supremo 21060), y por la expedición de normas que promueven los derechos y garantías de las personas trabajadoras, en particular la Reglamentación del salario dominical (Decreto Supremo N. 29010 de enero de 2009), la constitucionalización de los derechos laborales, en la que se promueve la incorporación de las mujeres al trabajo, la inamovilidad laboral de la madre gestante y padres progenitores (Decreto Supremo N. 012 de febrero de 2009), la creación del procedimiento para reincorporar a las personas trabajadoras que han sido despedidas injustificadamente (Decreto Supremo N. 495 de 10 de mayo de 2010), el pago de beneficios sociales por retiro forzoso o voluntario (Decreto Supremo N. 110 de 1 de mayo de 2010) y el pago de quinquenios sin que signifique renuncia del trabajador (Decreto Supremo N. 522 de 26 de mayo de 2010).

20. El GT recoge con suma satisfacción la respuesta por parte del Estado a los requerimientos anteriores, a partir de la reciente creación del Sistema de información de Niños, niñas y adolescentes (NNA), en la órbita del Ministerio de Justicia y en fase preliminar de desarrollo. Si bien no se ha consignado el alcance de dicho sistema: en

términos de categorías que incluye, fuentes de información, cobertura territorial, entre otros elementos que permitirían evaluar el impacto futuro de disponer de dicha información. Asimismo, el GT pondera altamente la consideración de un formulario, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión social para el registro de autorizaciones de actividad laboral de los NNA. No se detallan los contenidos del sistema, pero el GT hace votos para que la matriz y diseño incluyan los indicadores de los dos agrupamientos de derechos del PSS referidos a NNA.

21. El GT observa que el Estado parte ha remitido la información de condición de actividad pero no ha realizado el cálculo de las tasas de población económicamente activa por sexo, edad, nivel educativo y quintiles de ingreso, el número de cotizantes al sistema de pensiones por sexo, edad y quintiles de ingreso, y el total de subsidios al desempleo a personas no afiliadas a los sistemas contributivos, todos ellos indicadores de resultados. Tampoco el Estado parte ha informado sobre la existencia de medidas de acción positiva para mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, población LGTBI, encaminadas a garantizar el efectivo acceso del derecho a la seguridad social. El Estado parte informa que estos datos se encuentran disponibles en el INE, pero el GT recuerda que sería importante que a futuro sean incluidos en el cuerpo del informe.

22. El GT reitera que los datos sobre cobertura total nacional, desagregado por varones y mujeres y por edad en materia de seguridad social, así como en todos los derechos, deben presentarse en porcentaje y no en números totales o absolutos y con las desagregaciones señaladas (poblaciones indígenas, por regiones o provincias, por orientación sexual, por población urbana o rural, por nivel socioeconómico, por la formalidad o informalidad del trabajo).

23. Financiamiento para el derecho a la seguridad social y compromiso presupuestario: el GT mira con beneplácito los esfuerzos del Estado Nacional en materia de Gasto Público Social en educación (7,8%), en salud y deportes (6,3%) y en defensa (1,7%) y gobierno (1,4%) de acuerdo con datos del 2015. Respecto de la información del nivel de ejecución en los principales programas de transferencias de ingresos (renta dignidad, bono Juancito Pinto, entre otros) el GT solicita utilizar porcentajes de avance, en vez de números absolutos. Se insta al Estado parte que en futuros informes se remita a porcentaje o tasas cuando así se lo requiera, del mismo modo poder conocer información sobre los servicios prestados por la seguridad privada y que el impacto de cada programa se establezca en porcentaje (%). Sería importante tener información sobre la brecha salarial entre varones y mujeres y la metodología de cálculo de dicha brecha. Estas recomendaciones tienen especial relevancia para que pueda reflejarse los esfuerzos estatales, como por ejemplo, la reducción de la pobreza en menos de una década y en casi 20 puntos porcentuales, según consigna el Estado en base a datos del INE.¹

24. Capacidades estatales: El Estado Plurinacional de Bolivia ha presentado importante información sobre el número de rentistas, sobre el total de cotizantes, sobre la tasa de cobertura de accidentes, sobre los montos invertidos en el año 2012 en

¹ De acuerdo con CEPAL, en 2013 la tasa de pobreza era del 32,7%, la tasa de pobreza urbana alcanza en el mismo año el 22.3% y la rural el 54.1%, http://interwp.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Social.html?pais=BOL&idioma=spanish, visita abril 2016.

relación a invalidez y muerte, en relación con la PEA, a la población en edad de trabajar y sobre la PEI. Esta información da cuenta de cambios significativos en la estructura protectoria, sin embargo, no se ha complementado información referida a esta categoría transversal, especialmente en relación con el número de pensiones desglosadas, el total de cotizantes, la tasa de cobertura, la tasa de desempleo promedio anual y la tasa de informalidad laboral (sólo se han consignado datos absolutos y sin la correspondiente fuente), como también se requiere que se proporcione información sobre las señales de progreso, cobertura y alcance de las políticas públicas de inclusión de los no afiliados y sobre las campañas de formalización del empleo no registrado llevadas a cabo por el Estado, y las campañas oficiales en materia de prevención de riesgos de trabajo.

25. Igualdad y no discriminación: El Estado Plurinacional de Bolivia informa sobre el número de personas en relación de dependencia e independientes, el número de personas protegidas a corto plazo por sexo y por grupos de edad. También ha proporcionado importante información sobre la prohibición de discriminación en la selección de acceso del personal, que se realiza en aplicación del Decreto Supremo N° 213. De igual manera, la inclusión de la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual y/o identidad de género que contempla la Constitución Política, sería muy importante a criterio del GT que se vuelque en información y en indicadores. El GT destaca especialmente la normativa promulgada que garantiza el derecho al trabajo de las personas con discapacidad (Ley 223/12; Decretos 27477/09; 29608/8 y 1893/14). Asimismo, se subrayan especialmente las acciones desempeñadas por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades dependientes del Ministerio de Justicia y en el marco del Plan Operativo Anual que despliegan múltiples acciones de carácter intersectorial y con impacto territorial para la reducción de brechas en el ejercicio de derechos de personas con discapacidad. Dada la relevancia de las acciones, se recuerda la importancia de traducirlas en indicadores.

26. El GT observa con beneplácito la aclaración remitida por el Estado parte en relación con la regularización del trabajo asalariado en el hogar (Ley 2450 del 2003) y la ratificación del Convenio 189 de la OIT. El GT recomienda para los futuros informes disponer de información cuantitativa del impacto de la regularización de las trabajadoras, uso de licencias, entre otros datos requeridos. Del mismo modo las recomendaciones en relación con indicadores estructurales de acceso al seguro social de trabajadores rurales, en los indicadores de proceso, la base de cálculo de las prestaciones de seguridad social para varones y mujeres, y la extensión, cobertura y jurisdicción de mecanismos de inclusión de quienes realizan trabajo reproductivo o de cuidado, y los indicadores de resultados requeridos y no completados.

27. Acceso a la Información: El Estado Plurinacional de Bolivia enuncia, en este acápite, las normas jurídicas y presenta un cuadro sobre el número de casos e importe de pensiones de invalidez por riesgo profesional del sistema integral de pensiones. Sin embargo, no ha respondido sobre los demás indicadores solicitados.

28. Acceso a la justicia: el Estado Plurinacional de Bolivia informa que, cuando se presentan violaciones a los derechos laborales y sociales, existen la Inspectoría del Trabajo y Juzgados Laborales en la Justicia Ordinaria. En casos de acoso laboral o sexual, se puede hacer una denuncia al Ministerio Público. Se menciona el número de causas iniciadas, ingresadas, atendidas y resueltas, sin poder determinar la fuente ni el año, ya que solo se refiere a “gestión 2013” pero al no explicitarse la metodología de

cálculo ni la fuente no se puede analizar la información provista por el Estado parte. Se hace notar que debe aclararse el cuadro porque, según los indicadores contenidos en la Tabla, ingresaron 15.444 causas, están pendientes 20.747 y se han resuelto 16.298, lo que quiere decir que muchas causas de otros años fueron resueltas en el año informado. El GT requiere al Estado que proporcione la información solicitada en los indicadores estructurales en cuanto a acciones judiciales, contencioso administrativo y constitucionales, y la disponibilidad de servicios jurídicos, así como información sobre los indicadores de proceso en cuanto al número de denuncias, de organismos estatales y número de decisiones y acciones judiciales. De igual modo, se debe señalar el indicador de progreso sobre las encuestas de satisfacción o percepción de beneficiario.

IV. DERECHO A LA SALUD (ART. 10 PSS)

28. **Recepción del Derecho:** el GT valora especialmente que el Estado Plurinacional de Bolivia ha brindado información relevante al derecho a la Salud, así como los datos sobre su incorporación en la Constitución Política del Estado. El GT valora la información brindada en relación a la legislación nacional específica (Códigos y leyes especiales). El Estado ha consignado también información sobre la ratificación de Tratados Internacionales de derechos humanos, entre los que se valora especialmente que la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas haya sido elevada a rango de Ley. El GT se rectifica respecto a la ratificación por parte del Estado Parte del Protocolo Facultativo del PIDESC (2012) y del Protocolo Facultativo de CEDAW (2000).

29. El GT agradece la ampliación de información referida al reconocimiento de sistemas de salud indígenas, especialmente a partir de la creación del viceministerio de medicina tradicional e interculturalidad y la sanción de la Ley 459 del 2013: Ley de medicina tradicional boliviana; dando cuenta de un avance importante y los principios que se informan son acordes con el respeto de los derechos humanos. El GT recomienda, en futuros informes, incorporar datos que permitan evaluar el grado de implementación de estas medidas y la reglamentación de la ley, la cobertura, disponibilidad y accesibilidad de servicios de salud para población indígena, del mismo modo que ampliar la información sobre programas que otorgan prioridad a sectores vulnerables para servicios de salud e ir actualizando la misma, especialmente cuando se presentan variaciones en la cobertura. Para ello el GT recomienda al Estado Parte ir diseñando las fuentes de información necesarias y respetuosas del conjunto de derechos humanos para poder captar mejor, con indicadores de proceso y resultado estas medidas.

30. El GT agradece la mayor especificidad en torno a la cobertura en salud de la población por sexo, edad, raza/etnia, quintiles de ingreso y desagregado por tipo de cobertura (régimen subsidiado, contributivo o mixto). Sin embargo reitera que se requiere, además de la descripción, información empírica que permita validar el cumplimiento de las obligaciones señaladas. Nuevamente, se demanda información en porcentaje y no en números absolutos ya que no será posible a futuro establecer una línea de base para evaluar la progresividad en el cumplimiento del derecho a la salud.

31. En cuanto a la cobertura y jurisdicción de programas que otorgan prioridad a grupos en condición de vulnerabilidad para servicios de salud, el GT valora la información proporcionada sobre el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), el que, según

informa el Estado, amplió su cobertura desde el 1° de Setiembre de 2012 llegando a 769 prestaciones: fisioterapias, exámenes de laboratorio, tratamiento del labio leporino, hemodiálisis, cirugías reconstructivas, fisioterapia y exámenes para detectar enfermedades congénitas, como la fibrosis quística que afecta los pulmones y el sistema digestivo de los NNA. Benefician a niños y niñas menores de cinco años y mujeres embarazadas que no cuentan con seguro de salud y son atendidos de manera gratuita hasta los 6 meses después del parto. Los costos son cubiertos con fondos municipales. De acuerdo con la misma fuente, la tasa de mortalidad infantil disminuyó de 52 a 40 por cada 1.000 nacidos vivos entre 2006 y 2011; en el mismo período, la tasa de mortalidad en niños menores de cinco años se redujo de 65 a 51 por cada 1.000 nacidos vivos. El GT anima al Estado a avanzar con los datos desagregados sobre mortalidad infantil por sexo, por área geográfica, nivel educativo de la madre, quintiles de ingreso, etnia, neonatal y postnatal. Además, sería oportuno contar con datos sobre la tasa de mortalidad (por sexo y edad) ocasionada por accidentes, homicidios o suicidios.

32. El GT recuerda la importancia de consignar datos sobre la tasa de mortalidad materna por grupo de edad, área geográfica, etnia, nivel educativo y quintiles de ingreso, ya que se trata de datos que se incluyen entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que seguramente se encuentran disponibles y no han sido consignados. La mejor manera de evaluar el impacto de las acciones realizadas para garantizar la salud de los NNA del Estado Parte es a partir de la disponibilidad de los indicadores solicitados.

33. El GT observa la disponibilidad de registros para conocer el número de nacimientos por sexo. De acuerdo con la información brindada por el Estado se observa una visible disminución de nacimientos entre el año 2011 (238.420 nacimientos) y el año 2012 (135.117 nacimientos) sin una explicación que acompañe a estas cifras. También ha proporcionado número de defunciones y la tasa bruta de mortalidad (por mil) de 7,6 (entre 2005-2010) y de 7,1 (entre 2010-2015).

34. El Estado ha brindado información sobre adultos mayores de 65 años (varones y mujeres) cubiertos por programas de protección social, correspondiente a los años 2010 y 2011, pero no proporciona el porcentaje en relación al universo de adultos mayores de 65 años. El GT invita al Estado a proporcionar información completa en relación a la cobertura en salud de la población por sexo, edad, raza/etnia, quintiles de ingreso y desagregado por tipo de cobertura (régimen subsidiado, contributivo o mixto).

35. El GT solicita al Estado informar sobre la distribución del Gasto en salud por jurisdicciones (estadales, provinciales, locales), así como el porcentaje de recursos destinados a la capacitación de recursos humanos en salud, ya que sólo ha presentado información de gasto familiar en salud como proporción del ingreso familiar corriente, desagregado en quintiles, aunque no consigna el año. En el informe complementario del Estado Parte se avanza en algunos porcentajes en relación con el Gasto Público Social pero no en relación con los indicadores señalados.

36. **Capacidades Estatales:** el Estado proporciona información sobre política pública que incorpora el concepto básico de atención primaria de salud integral y universal: plan sectorial de Desarrollo 2010-2020 del Ministerio de Salud “Hacia la Salud Universal”; Plan Estratégico Nacional para mejorar la salud materna perinatal y neonatal en Bolivia 2009-2015; Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2009-2015.

37. El Estado informa que respecto a la adopción de protocolos para la implementación del aborto terapéutico, la Dirección General de Salud se encuentra en el proceso de elaboración y concertación de las “Normas Nacionales de Atención Clínica” y de los correspondientes Protocolos de Atención de Segundo Nivel en el marco de la Ley 348, y en su homologación por parte del Instituto de Investigaciones Forenses - IDIF para la emisión de la certificación correspondiente (Información del Ministerio de Educación).

38. Por otra parte, el Estado comunicó que la Ley N° 475 de 30 de diciembre de 2013, de “prestaciones de servicios de salud integral del Estado Plurinacional de Bolivia”, dispone la inclusión de prestaciones de salud para las mujeres en edad fértil, respecto a atenciones en salud sexual y reproductiva, así como la implementación de la atención integral que implica acciones de promoción, prevención, consulta ambulatoria integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, la provisión de medicamentos esenciales, insumos médicos y productos naturales tradicionales. El GT observa la falta de información en relación al alcance, jurisdicción y financiamiento de una política nacional sobre medicamentos esenciales, oncológicos, retrovirales y medicamentos genéricos.

39. En cambio, observa el GT de manera positiva la información proporcionada en relación a la densidad del personal profesional auxiliar por cantidad de camas de hospital número de médicos (por cada 10.000 habitantes corresponde a 4.0 y número de habitantes por cama hospitalaria corresponde a 965). Sin embargo, el GT evidencia que no existe información sobre la fecha de estos datos.

40. Brinda el Estado información sobre establecimientos de salud, según departamento y tipo de establecimiento, según estos sean puestos de salud, centros de salud, hospital básico, hospital general, instituto especializado. La información proporcionada no identifica la fecha y tampoco permite medir la accesibilidad del servicio. Brinda el Estado información sobre recursos humanos del sistema de salud a nivel nacional en el año 2011 y cantidad de partos atendidos en el 2012. Sin embargo no se aclara la diferencia entre partos atendidos (si efectivamente fueron a cargo de profesionales) lo mismo que la mención a institucionales si efectivamente da cuenta de la presencia de equipos profesionales en cada centro de salud. El GT invita al Estado a proporcionar datos de años siguientes.

41. El Estado parte brinda, en cuanto a indicadores de resultados, información sobre cobertura de programas de asistencia a adultos mayores por departamentos, correspondientes al año 2011. No ha presentado información en relación con la cobertura, extensión, jurisdicción y financiamiento de los programas de atención primaria en salud así como la cobertura de planes de seguro de salud, por sexo, edad y región geográfica en calidad de cotizantes o beneficiarios.

42. **Igualdad:** el Estado parte brinda la información solicitada en cuanto regulación del aborto (Arts. 263 al 268 del Código Penal Boliviano); ley o política nacional para los discapacitados físicos y mentales; Ley General para personas con discapacidad; políticas base para personas con discapacidad a cargo del Ministerio de Justicia; Plan sectorial de Desarrollo 2010-2020 del Ministerio de Salud “Hacia la Salud Universal; y Proyecto de Ley de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que se encuentra siguiendo el proceso legislativo correspondiente y no se ha informado sobre

su alcance en cuanto al ejercicio de derechos reproductivos. Asimismo el GT anima al Estado a proporcionar información referente a estimaciones de abortos inducidos, por edad, lugar de residencia (urbano o rural) y condiciones socioeconómicas de la mujer embarazada. Igualmente, las estimaciones sobre casos de abortos ilegales, por edad, lugar de residencia (urbano o rural) y condiciones socioeconómicas de la mujer embarazada u otros datos disponibles.

43. Aporta el Estado información sobre consulta de población mayor de 5 años y establece un porcentaje de re-consulta que estima en 36,33%, sin fuentes y sin establecer los porcentajes requeridos por la metodología de indicadores. Igualmente proporciona información sobre consultas externas en la población menor de 5 años y establece el porcentaje de quienes repiten la consulta en 19,79%. Solicita el GT al Estado parte que establezca el porcentaje de niños y niñas menores y mayores de 5 años, según el total de la población en dichas edades así como la metodología de cálculo y fuentes de información utilizadas.

44. Proporciona el Estado información, aunque sin fecha establecida de la cantidad de mujeres embarazadas que hicieron el cuarto control prenatal según departamento, y el GT solicita al Estado intentar proporcionar el porcentaje de mujeres embarazadas que reciben dicha asistencia en salud prenatal. Proporciona el Estado información sobre salud sexual y reproductiva, señalando que los métodos de anticoncepción consistentes en la píldora del día después, implante subdérmico y condón femenino empezaron a ser distribuidos en hospitales de segundo nivel y centros de salud de barrio a nivel nacional de manera gratuita desde el mes de octubre como parte del Seguro Materno Infantil (SUMI). En el caso del implante subdérmico, el Ministerio de Salud se encuentra capacitando a médicos para que realicen el proceso quirúrgico de implantación de la varilla que compone a dicho medio de contracepción. En el caso de adolescentes, antes de entregárseles la píldora, el médico del centro sanitario al que acuda la adolescente, debe otorgar una charla de orientación sobre salud sexual, con el objetivo de disminuir los embarazos precoces en ese grupo de menores y bajar la mortalidad materna por abortos. Al tiempo de reconocer el valor del servicio proporcionado por el Estado, el GT solicita al Estado proporcione mayor información estadística sobre estos servicios.

45. Igualmente solicita el GT al Estado Plurinacional de Bolivia proporcione información sobre el porcentaje de la población que utiliza sistemas indígenas o alternativos de atención de la salud, y proporcione datos estadísticos sobre las características, cobertura, presupuesto y jurisdicciones en programas de salud sexual y reproductiva, atendiendo a la información proporcionada por el Estado en relación a la Ley 475/2013, de “Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia”, que dispone la inclusión de prestaciones de salud para las mujeres en edad fértil, respecto a atenciones en salud sexual y reproductiva, así como la implementación de la atención integral que implica acciones de promoción, prevención, consulta ambulatoria integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, la provisión de medicamentos esenciales, insumos médicos y productos naturales tradicionales. Del mismo modo por orientación sexual, personas LGTBI e identidad de género.

46. El GT toma nota y valora muy positivamente la información del Ministerio de Educación del Estado parte sobre el currículo base del Sistema Educativo Plurinacional, que contempla dentro de sus planes y programas, la educación sexual de manera integral,

así mismo viene trabajando en la implementación del plan en sexualidad integral que abarca diferentes temáticas como ser: prevención embarazo adolescente, prevención VIH-SIDA, diversidades sexuales y genéricas y derechos sexuales y reproductivos. El GT anima al Estado parte a continuar brindando información estadística sobre estas actividades relacionadas con la educación sexual de manera integral.

47. El GT llama al Estado a procurar datos del porcentaje de mujeres embarazadas con test de HIV/SIDA, así como el porcentaje de niños y niñas nacidos de madres HIV positivas que contrajeron el virus en los dos primeros años de vida (casos notificados de SIDA por transmisión vertical). Igualmente solicita al Estado brindar datos indicadores de lactancia materna exclusiva hasta el cuarto mes y hasta el sexto mes.

48. El Estado, en indicadores de resultados, ha brindado información sobre el control de crecimiento a niños menores de cinco años nuevos y repetidos, a nivel nacional en el año 2012. El GT valora la información proporcionada sobre el porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica y desnutrición global; al mismo tiempo, se aprecia la presentación de datos proporcionados en relación a la composición de los casos notificados de SIDA y diagnósticos VIH por años 2010-2012 según casos. Igualmente, el GT valora la presentación de datos sobre el total de estudios citológicos vaginales (PAP) en mujeres en edad fértil, por departamento correspondientes a los años 2011 y 2012. El GT solicita al Estado datos del porcentaje de mujeres que realizan estos exámenes citológicos.

49. Al tiempo de valorar la información sobre cobertura de vacunación antirotavirus 1º y 2º dosis aplicadas a niños y niñas menores de 1 año por departamento, el GT invita a informar sobre la cobertura de vacunación obligatoria. Igualmente, se solicita al Estado informar sobre el porcentaje de mujeres que realizan control prenatal en el primer trimestre; la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos entre población adolescente y entre población adulta sexualmente activa. También el porcentaje de discapacitados físicos o mentales que tienen acceso a servicios de salud de instituciones públicas o sociales.

50. **Acceso a información pública y participación:** en cuanto a las normas y regulaciones de protección del Estado sobre la confidencialidad de la información personal de salud, el Estado informó de la existencia de la ley sobre el ejercicio profesional médico. En cuanto a las disposiciones y/o legislación que requieran el consentimiento de la persona para aceptar o rechazar un tratamiento, el Estado informó sobre la norma constitucional y sobre la ley del ejercicio profesional médico. El GT llama al Estado a aumentar su información en lo relacionado a las características, cobertura (territorial y temática), presupuesto y jurisdicción del sistema estadístico en materia de salud, consignando las formas y frecuencia de actualización de la información, y difusión.

51. El GT llama al Estado a complementar su información en lo relacionado con los siguientes puntos: - Porcentaje de efectores de salud con protocolos de confidencialidad de la información sobre su salud; - Cobertura de acciones o campañas de difusión por parte del Estado de información sobre políticas de salud sexual y reproductiva; - Cobertura de acciones o campañas de asesoramiento a mujeres embarazadas sobre formas de transmisión madre-hijo de HIV/SIDA; - Cobertura de acciones o campañas de información y programas de difusión sobre los efectos del consumo de alcohol,

tabaco y otras drogas, - Distribución geográfica, jurisdiccional y étnica de servicios de traducción en los efectores de salud a otros idiomas hablados en el país.

52. El GT llama al Estado a procurar la información referente a: i) Porcentaje de niños y niñas nacidos con malformaciones fetales por consumo de alcohol y otro tipo de drogas u otros componentes como por ej. Agrotóxicos; ii) Porcentaje de subregistro de nacimientos. También solicita el GT al Estado si pudiera informar en relación con la existencia de mecanismos permanentes de participación ciudadana para la elaboración de recomendaciones en el diseño e implementación de políticas de salud.

53. **Acceso a la justicia:** El Estado informó de la existencia de instancias administrativas para radicar denuncias en materia de incumplimiento de obligaciones vinculadas al derecho a la salud, identificando al Ministerio de Salud, Defensor del Pueblo y Colegio Médico como dichas instancias. Igualmente, ha señalado que el Ministerio de Salud recibe denuncias y reclamos sobre servicios médicos a través del formulario FD-MSD-03 en su página web y en atención en ventanillas en el Ministerio. El GT solicita mayor información sobre el funcionamiento de dichas modalidades de denuncias y el grado de efectividad para asegurar el derecho al acceso a la justicia.

54. El GT solicita al Estado le proporcione información sobre los siguientes aspectos: Número de decisiones judiciales que han hecho lugar a garantías en salud en general y en casos específicos (salud sexual y reproductiva, personas con HIV-SIDA; entre otras), Número de denuncias relativas al derecho a la salud recibidas, investigadas y resueltas por las instituciones nacionales de derechos humanos competentes en el país, políticas de capacitación de jueces y abogados en materia de derecho a la salud, cobertura temática y alcance.

55. El GT por último agradece al Estado le pueda proporcionar datos sobre características y cobertura de los medios que difunden información a las personas de sus derechos en relación con la salud. Igualmente agradecerá información referente a la cobertura de los servicios de traducción de estos programas en lenguas indígenas.

56. El GT reitera la importancia de la información adicional que presenta el Estado Parte y los logros que reflejan en cuanto a derechos de personas con discapacidad, jóvenes, derechos de las mujeres, entre otros. En los casos que se ha consignado información estadística es en números absolutos y no en porcentajes que permitirían apreciar mejor el impacto de la política implementada. Si bien muchos de los indicadores se ajustan a indicadores de proceso, requeridos por el Sistema de protección universal de derechos humanos, no resulta complejo poder disponer de las fuentes de información para calcular los indicadores requeridos para el Protocolo de San Salvador.

57. El GT recoge la observación planteada por el Estado parte en relación a que el análisis del informe preliminar *“no visibilizan a la población juvenil como tal, sino que agrupa en diferentes ámbitos y contextos referidos al ejercicio de los derechos a la igualdad de oportunidades”* (pag 11, informe final). Cabe señalar que tal como se señala en el Documento Indicadores de Progreso (OEA, Ser.D/XXVI. 11, 2015) los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos de las mujeres, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad –reconocidos expresamente en el Protocolo- junto con una perspectiva de género, étnica y de diversidad sexual, son considerados de manera transversal a cada derecho.

58. El GT celebra el proyecto vinculado al fortalecimiento del acceso a la justicia y prevención de violencia contra las mujeres en naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos y afrodescendientes y hace votos para la pronta y oportuna implementación, en el entendido que representa un primer paso para ampliar las garantías de acceso a la justicia, en este caso de las mujeres víctimas de violencia, pero es la aspiración que se vaya consolidando en los diversos campos de garantías de los derechos económicos, sociales y culturales.

V. DERECHO A LA EDUCACIÓN (ART. 13 PSS)

59. Recepción del derecho: el GT felicita al Estado Plurinacional de Bolivia por haber ratificado todos los instrumentos internacionales relacionados con el derecho a la educación, por haber incorporado en la Constitución el derecho a la educación (Artículos 9.5, 17, 30, 70.2, 70-97), y por haber desarrollado el derecho en múltiples instrumentos nacionales jurídicos que contienen normas relacionadas al derecho a la educación (Ley N° 2026 de 27 de octubre de 1999, Código Niño, Niña y Adolescente; Ley N° 223, Ley General para persona con discapacidad, de 02 de marzo de 2012; Ley N° 070, Avelino Siñani – Elizardo Pérez, de 20 de diciembre de 2010 que regula el Sistema Educativo Plurinacional; Ley 269, Ley General de derechos y políticas lingüísticas, de 02 de agosto de 2012; Decreto Supremo N° 23950, Reglamento de Organización Curricular de 01 de febrero de 1995; Decreto Supremo N° 23952, Reglamento sobre la estructura de los Servicios Técnico Pedagógicos, de 01 de febrero de 1995; Decreto Supremo N° 25255 de Administración del Personal del Servicio de Educación Pública de 18 de diciembre de 1998; Decreto Supremo N° 25273 de organización y funciones de las juntas escolares, de núcleo y distrito, de 08 de enero de 1999; Decreto Supremo N° 26275, Reglamento General de Universidades Privadas; el Reglamento General de Postgrado para Universidades Privadas, de 05 de agosto de 2001; Decreto Supremo N° 28570 Reglamento General de Universidades Privadas, de 22 de diciembre de 2005; Decreto Supremo N° 29851, de 10 de diciembre de 2008, Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos; Decreto Supremo N° 29894 de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, de 07 de febrero de 2009; Decreto Supremo N° 1302 y N° 1320, de 01 y 08 de agosto de 2012 para erradicar violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo). Sería importante conocer si se cuenta con legislación o regulación normativa sobre el acoso escolar.

60. El Estado informa que ha elaborado y está implementando el Plan Plurinacional de Educación en Derechos Humanos, el programa “Yo sí puedo”, el seguimiento para las personas recién alfabetizadas, bajo preceptos de pluralismo y diversidad en el sistema educativo, la creación de la unidad de políticas intracultural y plurilingüe, el currículo base plurinacional, el currículo regionalizado, la incorporación al sistema educativo plurinacional saberes, cosmovisiones, valores e historias de las naciones y pueblos indígenas originarios, el currículo regionalizado en chiquitano, guaraní, quechua, ayoreo, aymara, guarayo, mojeño; la creación del Instituto de estudios de Lenguas y Culturas (IPELC), la elaboración de libretas escolares en lenguas indígenas, la publicación de alfabetos en lenguas indígenas publicadas, la investigación de saberes y conocimiento de 26 pueblos indígenas, la formación de maestros en educación intracultural,

intercultural y plurilingüe, la creación de las universidades indígenas, las becas para pueblos indígenas, el proyecto de educación intercultural bilingüe en la Amazonía, el proyecto educativo afroboliviano, los telecentros educativos comunitarios y la publicación de materiales educativos en lenguas indígenas.

61. El Estado Parte no ha profundizado en el reciente Código Niño, Niña y Adolescente, sancionado por Ley 548 del 17 de julio de 2014, y el impacto que este nuevo marco regulatorio acarrea. El GT observa asimismo que no se han incorporado, como en los otros dos derechos, los datos solicitados en el Informe preliminar, sobre el derecho a la educación. El GT reitera que los requerimientos de información responden a la necesidad de poder reflejar los importantes avances que el Estado Plurinacional de Bolivia ha realizado. Asimismo la información presentada cumple el recaudo de ser la línea de base para los próximos informes y poder medir el estándar de progresividad y otros estándares centrales en materia de derechos humanos.

62. En concordancia, el GT advierte que mucha de la información estadística presentada por el Estado parte se consigna que corresponde a las gestiones 2010-2013; sin embargo, no todos los datos presentados se refieren a esos tres años, sino sólo a alguno/s de ellos, lo cual no posibilita medir el grado de avance en materia educativa. El GT recuerda la necesidad de informar sobre indicadores de proceso, especialmente la tasa de asistencia escolar por jurisdicción geográfica desagregada por grupos de edad, por quintil. También el GT hace notar que falta completar datos relacionados con el nivel de desempeño de estudiantes, la cobertura de programas y acciones para garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo y la cobertura de programas destinados a Educación de Primera Infancia y Educación de Jóvenes y Adultos por zona de residencia.

63. En los indicadores de resultados el Estado informa sobre la tasa neta de cobertura por niveles de enseñanza, la tasa de analfabetismo, la tasa de conclusión de primaria y secundaria al año 2011. El GT hace notar que no en todos los indicadores está señalada una tasa y es importante hacer el cálculo, el desglose étnico, por grupos de edad y por quintiles de ingreso. Además, el GT señala la importancia de proporcionar el indicador de señal de progreso sobre las características de cobertura y sobre el número de organizaciones de la sociedad civil.

64. **Contexto financiero y compromisos presupuestarios:** en los indicadores estructurales, el Estado no ha presentado información sobre las leyes y medidas específicas, el monto y la extensión de incentivos para la educación. En los indicadores de proceso, el Estado informa sobre el porcentaje del gasto público social destinado a educación, inicialmente consigna 7.35% y posteriormente 7,8%. Sin embargo, el GT hace notar que falta información sobre el gasto público por niveles educativos, el porcentaje de inversión en I+D en región con respecto al PIB, el gasto privado en educación, la distribución del gasto por jurisdicciones. Además, falta la señal de progreso sobre la existencia de planes con metas específicas. En los indicadores de resultado, el Estado presenta el número de alumnos matriculados, el número de docentes y el gasto según quintil de ingreso mensual de hogares. El GT solicita que se entreguen todos los datos en porcentajes.

65. **Capacidades estatales:** el Estado no informa sobre los indicadores estructurales. El GT considera importante informar sobre el porcentaje de escuelas que participan en

programas de evaluación de contenidos y calidad educativa, la participación del sector oficial en la matrícula por nivel educativo y las características, montos y gestión de asistencia. En los indicadores de proceso, el Estado informa sobre el número de establecimientos educativos, el número de unidades educativas por jurisdicción territorial. El GT considera importante establecer la existencia de Planes con metas específicas de expansión del acceso a la educación secundaria. En los indicadores de resultado, el Estado presenta datos sobre los años promedio de Estudio de la población de 15 años o más y el porcentaje de la población con 8 años o más años de estudio en el año 2011. El GT hace notar que falta el desagregado por sexo y considera importante el dato sobre el porcentaje de escuelas y docentes que participan en programas de formación continua e innovadora.

66. **Igualdad:** el Estado, dentro de los indicadores estructurales, enumera la ley sobre discapacidad (Ley N 223) y la Ley sobre el sistema educativo plurinacional (Ley 070). El GT considera importante identificar la existencia de políticas que garanticen la no discriminación en la educación y una educación no discriminatoria. De igual modo, considera que es importante señalar el indicador sobre el presupuesto y el sistema estadístico de educación. El GT apreciaría como altamente positivo si se puede identificar si existen normas y/o políticas encaminadas a tomar acciones afirmativas para lograr la igualdad material.

67. En los indicadores de proceso, el Estado no registra información. Sería importante que el Estado proporcione información sobre el porcentaje de familias con dificultades socioeconómicas que reciben apoyo para garantizar la asistencia habitual de sus hijos e hijas a las escuelas, el porcentaje de becas a alumnos de todos los niveles educativos, el porcentaje de educadores que tienen el título específico de educación inicial, el porcentaje de matrícula de primaria de tiempo completo o doble turno por gestión público o privada. De igual modo, el GT considera que el indicador de progreso sobre la frecuencia y resultados en la actualización de contenidos básicos de la educación que incluya el enfoque de diversidad es importante señalarlo.

68. En los indicadores de resultado, se informa sobre las tasas de alfabetización de varones y mujeres, por jurisdicción territorial, en el año 2011, con distinciones en lo rural y urbano, indicadores sobre los años de promedio de población de 15 años o más y de población con 8 años o más de estudio, con especificación de lo étnico; información sobre población de 6 años y más por idiomas hablados a nivel nacional, y un cuadro sobre el nivel de educación alcanzado por división de urbano, rural. Sin embargo, el Estado ha omitido señalar información sobre el porcentaje de alumnado de poblaciones indígenas y afrodescendientes que realiza estudios de educación técnico-profesional y universitarios, y el porcentaje de alumnos que pertenecen a pueblos originarios que recibe educación bilingüe por nivel educativo.²

69. **Acceso a la información y participación social:** El Estado informa que el Plan de Educación en Derechos Humanos *“fue construido participativamente en todos los departamentos del país, con la participación de niños, niñas y adolescentes y jóvenes”*. El GT felicita al Estado por esta iniciativa y espera que positiva práctica pueda ser replicada e implementada en todas las políticas, planes y proyectos que afecten a las personas.

² En virtud de las observaciones formuladas por el Comité PIDESC a Bolivia en el informe 2008, se solicita información sobre programas de trabajo infantil y criaditos.

70. El GT considera importante que el Estado informe sobre las características, cobertura territorial y temática, presupuesto y jurisdicción del sistema estadístico en materia educativa, como también el indicador de progreso sobre las características, cobertura y periodicidad de campañas de difusión del derecho a la educación, y el indicador sobre características, cobertura y periodicidad de campañas de difusión para la erradicación del analfabetismo.

71. En el indicador de proceso, el Estado menciona que tiene el INE y la unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). Sería importante que el Estado informe además sobre los mecanismos establecidos para la difusión de resultados de calidad educativa y cumplimiento de metas en educación, y el indicador sobre el número de proyectos educativos presentados y aprobados. Además, el GT considera importante señalar, como determina el indicador de progreso, las características y cobertura de los medios que difunden información a las personas de su derecho a la educación en todos los niveles del sistema educativo (formal, no formal, primera infancia, EDJA).

72. **Acceso a la justicia:** en indicadores estructurales, el Estado señala que hay instancias administrativas (Ministerio de Educación, direcciones distritales y Defensoría del Pueblo). El GT considera importante completar la información sobre las acciones jurisdiccionales de carácter contencioso administrativo y constitucional, como también la existencia de servicios jurídicos gratuitos. El GT considera importante señalar el número de decisiones judiciales que sobre el derecho a la educación, especificando si se ha aceptado o rechazado; el número de denuncias relativas al derecho a la investigación, especificando si se han iniciado procesos y si han tenido resolución. Finalmente, es importante señalar el indicador de progreso sobre las características y cobertura de los medios que difunden información a las personas de sus derechos en relación con la educación, ya que no han sido consignados y el GT espera que en futuros informes sean incluidos.

VI. CONCLUSIONES

73. El Estado Plurinacional de Bolivia ha cumplido con la obligación de entregar el informe sobre el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, de conformidad con el Art. 19 del Protocolo de San Salvador (en su versión preliminar y definitiva) correspondiente al primer agrupamiento de derechos (seguridad social, salud y educación) y ha participado de las audiencias públicas. El informe presentado revela las acciones importantes que ha venido realizando el Estado para promover y garantizar estos derechos.

El GT deja constancia que en esta primera etapa de monitoreo del Protocolo de San Salvador se ha realizado el análisis exclusivamente con base en la información oficial remitida por el Estado Plurinacional de Bolivia en su informe, sin utilizar fuentes adicionales. En el subsiguiente informe, cuando se incorpore información sobre el cumplimiento de los dos agrupamientos (previsto para junio 2019), y a los efectos de cumplimentar el estándar de progresividad, se contrastará la información oficial con datos de organismos públicos no gubernamentales, defensorías del pueblo, auditorías y otros órganos de control gubernamental, organismos y organizaciones especializadas, entre otros, de modo de dar mayor

alcance al proceso de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Protocolo de San Salvador.

Aspectos Positivos

74. El GT reconoce los esfuerzos realizados por el Estado para brindar información al GT y destaca especialmente el proceso interno de definición de indicadores de derechos humanos, con el apoyo de la OACNUDH de Bolivia y disponibles en la página del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Estos esfuerzos se han acompañado de un importante proceso de definición de políticas públicas respetuosas de las obligaciones contenidas en los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en el Protocolo de San Salvador.

75. El GT señala que los esfuerzos en el campo de la recepción del derecho, tanto a partir de la sanción de un conjunto de normas protectorias bajo un principio de igualdad y no discriminación, respetuoso de la interculturalidad, de las identidades sexuales y de género, representa un avance de suma trascendencia. Preocupa sin embargo, dado que es escasa la información consignada por el Estado parte en materia de indicadores de proceso y de resultados, hecho que impide ver la traducción de dichas obligaciones en el campo de las políticas públicas o del impacto directo en las condiciones de ejercicio de los tres derechos en cuestión.

76. El Estado Plurinacional de Bolivia, en materia de protección de la seguridad social demuestra importantes avances que el GT celebra especialmente. Al respecto, en materia de recepción del derecho, es notorio el esfuerzo de regulación normativa realizado, tanto en la incorporación constitucional como legislativa, como también en materia de inspección del trabajo, el haber dotado de estabilidad laboral y salario dominical para los trabajadores de determinados sectores productivos y un gran impulso normativo a las garantías en torno a la no discriminación y la equidad de género, como también en el resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y los derechos de las personas con discapacidad. El GT destaca asimismo la ampliación de medidas protectorias para trabajadoras madres y padres (inamovilidad laboral de madres gestantes y padres progenitores), la protección por embarazo e igual remuneración por la misma tarea y la ampliación de la cobertura en seguridad social de trabajadores y trabajadoras. Un especial reconocimiento merece la disminución de la extrema pobreza operada, en tanto se ha disminuido de 38,2% en el año 2005 a 18,13% en el 2013 de acuerdo con datos oficiales provistos por el INE.

77. El GT reitera los avances evidentes en el campo del derecho a la salud, tanto en materia normativa (indicadores estructurales), el reconocimiento en la estructura estatal de un área específica de medicina tradicional e interculturalidad, el avance en la incorporación de prácticas específicas, aumento en la cobertura especialmente en prestaciones para NNA, disminución de la mortalidad materna e infantil, en materia de provisión de medicamentos, en la definición del alcance de la atención primaria en salud y avances en la deliberación legislativa en torno a la salud sexual y reproductiva, entre otras medidas adoptadas.

78. En materia de derecho a la educación el GT destaca el avance normativo desarrollado desde la reforma constitucional a la fecha, la definición de un Plan Plurinacional de Educación en Derechos Humanos, la incorporación de la educación

intracultural y plurilingüe, bajo preceptos de pluralismo y diversidad en el sistema educativo, el currículo base plurinacional y regionalizado, la formación de maestros en educación intracultural, intercultural y plurilingüe, la creación de las universidades indígenas, las becas para pueblos indígenas entre otras medidas que se han destacado a lo largo del informe. El GT destaca especialmente el impacto del Programa “Yo sí puedo” que permitió que entre el año 2006 al 2008 la población analfabeta absoluta y funcional disminuyera de manera significativa, representando un 8% de la población total según informa el Estado Parte y que llevó a que el Estado Plurinacional de Bolivia sea declarado como “territorio libre de analfabetismo” y que se continúa con el programa de post alfabetización.

Preocupaciones y Recomendaciones

79. El GT manifiesta su preocupación en relación a numerosos indicadores que el Estado parte no ha contestado, en muchos casos porque no se encuentran disponibles, pero en otros que efectivamente existe disponibilidad no han sido incorporados en el informe o la información es inexacta, no se presenta en porcentajes o en las tasas solicitadas, no se consignan las fuentes utilizadas o los años correspondientes.

El GT insta al Estado parte que en los próximos informes incorpore la mayor cantidad de indicadores solicitados, sea riguroso en la información presentada, se desagregue en las categorías propuestas (sexo, edad, etnia, ubicación geográfica, personas con discapacidad, diversidad sexual), se consignen el año y las fuentes utilizadas, cuando se solicita porcentaje o tasas éstos sean calculados. En los casos que, al momento de presentar el informe no se pueda disponer del indicador o de la señal de progreso, se insta al Estado parte a que manifieste las acciones que se han adoptado para disponer de dicha información a futuro.

80. Preocupa al GT que no se han consignado indicadores de participación de la sociedad civil, el Estado parte solo ha manifestado que “la participación de la sociedad civil en el proceso de informes así como en los planes de desarrollo es permanente”, refiriendo especialmente la Agenda Patriótica 2025 y la Ley 341 de participación y control social. Sin embargo, el GT no evidencia ningún indicador que de cuenta del alcance de dicha participación, las medidas concretas adoptadas, la frecuencia y alcance del ejercicio del control social, reconocido como derecho constitucional por el Estado Plurinacional de Bolivia.

El GT insta al Estado parte a profundizar los canales de participación ciudadana como también a presentar indicadores que den cuenta de dicha participación permanente. Recuerda asimismo que el Protocolo de San Salvador, como protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, protege a todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia y en consecuencia es obligación estatal promover el empoderamiento ciudadano y ejercicio pleno de derechos, que deben traducirse en indicadores empíricos verificables.

81. En relación con las obligaciones contenidas en el derecho a la seguridad social, el GT destaca los avances notorios del Estado en torno al aumento de la cobertura protectora a nivel legislativo, la incorporación de medidas importantes en el marco de Programas de Transferencia de ingresos, como el Bono Juancito Pinto, la renta dignidad,

Bono Juana Azurduy y otras medidas concretas adoptadas, en especial para personas con discapacidad, salario dominical, medidas de conciliación trabajo-familia para trabajadoras mujeres y varones, reincorporación por despido injustificado, regulación del trabajo asalariado en el hogar, inspección en el trabajo, entre otras mencionadas *ut supra*.

Preocupa al GT la sostenibilidad de las medidas adoptadas, tanto en términos de cobertura, universalidad y calidad, ya que de la información recibida y la falta de datos concretos en algunas de las áreas, no se ha podido verificar y el GT insta al Estado parte a evaluar la continuidad de las acciones desarrolladas, poniendo especial énfasis en los indicadores de proceso y de resultados.

El GT recomienda al Estado parte que intensifique las medidas para disminuir las brechas aún existentes en el acceso a la seguridad social a fin de asegurar su cobertura universal para varones y mujeres.

82. En los tres derechos analizados, preocupa especialmente al GT la falta de información –o información incompleta- en materia de acceso a la justicia, capacidades estatales y acceso a la información, cuya relevancia en términos de cumplimiento de obligaciones estatales en el campo de los DESC es indiscutible, en tanto conjuga el alcance del ejercicio de los mismos. El GT recuerda que los indicadores posibilitan, a los efectos del monitoreo del cumplimiento del Protocolo de San Salvador, una lectura integral e interdependiente de cada uno de ellos, por lo que cuando se requiere al Estado tasa de cobertura por accidentes de trabajo (se solicita la tasa no el número de personas cubiertas) se vincula con los casos reportados y resueltos en materia de accidentes de trabajo en sede judicial y a su vez con el porcentaje de formalidad laboral. De allí la insistencia del GT sobre la necesidad de responder en su totalidad los indicadores solicitados.

El GT exhorta al Estado parte a definir una plan de diseño y recolección de información vinculadas a la forma de organización y distribución de responsabilidades estatales (indicadores de capacidades estatales), de acceso a la justicia, tanto en relación con el Poder Judicial como las otras instancias vinculadas a los ministerios públicos, defensorías del pueblo, e indicadores de producción y acceso a la información y participación ciudadana. Esta preocupación alcanza a los tres derechos evaluados.

83. Preocupa la falta de indicadores de resultado presentados por el Estado parte en materia de salud, lo cual impide al GT evaluar el alcance de las importantes reformas legislativas realizadas en los últimos años. Asimismo preocupa al GT la disparidad en la información presentada sobre el Gasto Público destinado a salud: el Estado parte informa que destina un 6,78% del Gasto Público a Salud y deportes (informe adicional), sin embargo en la información presentada en la Tabla, consigna que en el año 2008 solo un 3,18% del Gasto Público como porcentaje del PBI fue a salud y se ha incrementado en el 2010 a 3,58% y para protección social en el 2008 destinaba 5,67% del producto, mismo porcentaje que informa para el 2010 (sin consignar la fuente de información).

El GT insta al Estado parte que verifique la información presentada y que aumente los recursos destinados al sector salud. El GT recomienda al Estado parte que continúe intensificando las políticas y acciones para asegurar el

acceso a una atención de la salud universal, en calidad y sin discriminación, considerando las desigualdades territoriales y regionales en el acceso a los servicios de salud. La recomendación alcanza a un mayor esfuerzo en los efectores de salud, en resguardo de la accesibilidad, adecuabilidad y disponibilidad de los mismos.

Preocupa al GT el aumento de los casos notificados de SIDA Y VIH, entre los años 2011-2012, que si bien el Estado parte ha presentado información sin citar la fuente, se verifica un aumento considerable. Se recomienda al Estado intensificar las medidas y acciones de prevención y tratamiento de esta enfermedad, y de otras enfermedades transmisibles.

84. El GT advierte que, a pesar de que el Estado parte ha presentado información incompleta, la desnutrición crónica y global de NNA menores de cinco años es elevada, y con prevalencia por regiones.

El GT insta al Estado parte a que presente información completa y que refuerce de manera inmediata acciones de prevención y erradicación de la desnutrición como de la nutrición en general. En vistas a que el próximo agrupamiento de derechos a informar incluye el derecho a la alimentación, se espera que el Estado parte informe sobre las acciones desempeñadas al respecto. Inquieta al GT, si se dispone de provisión de merienda escolar por zonas geográficas y alcance de la cobertura.

85. El GT recoge los datos informados por el Estado parte en materia de elaboración participativa del Plan de Educación en Derechos Humanos, que el mismo contó con amplia participación comunitaria por cada departamento del país, con pluralidad y diversidad de instituciones, y si bien es un proceso en implementación, preocupa al GT la escasa información que se ha proporcionado en indicadores de proceso y de resultados en la implementación del Plan.

El GT insta al Estado parte que en futuros informes remita datos concretos del alcance de la implementación de este Plan y de la efectiva participación comunitaria, dada la relevancia que el mismo tiene y su carácter novedoso en términos de acciones desarrolladas.

86. Preocupa al GT que el Estado Plurinacional de Bolivia no ha informado sobre la obligatoriedad escolar, la duración y rangos de edad que abarca, al mismo tiempo que no se ha presentado información sobre la gratuidad de la educación por nivel de escolaridad. Asimismo, el Estado informa que "...en el marco de la Ley de Educación No 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez, el Ministerio de Educación continua con los procesos de alfabetización residual desde la gestión 2012, incrementando esfuerzos para erradicar el analfabetismo logrando apoyar a todas y todos los bolivianos que quieren aprender a leer y escribir a lo largo del territorio nacional" (pág. 9). Agrega el Estado la siguiente información: "En la gestión 2012 se tiene 95.076 personas participantes a nivel nacional y durante la gestión 2013 el número de participantes asciende a 104.499 participantes a nivel nacional" (pág. 9), información que luego no se integra a los indicadores solicitados, al mismo tiempo que al estar presentada en números absolutos, impide la posibilidad de comparar el alcance de la medida.

El GT recomienda al Estado parte que intensifique las medidas adoptadas para garantizar el acceso y la calidad de la educación en todos los niveles de enseñanza, así como su gratuidad y obligatoriedad. El GT solicita al Estado Parte mayor rigurosidad en la información presentada, que se ajuste a los indicadores solicitados, y que consigne las fuentes utilizadas. Recomendamos asimismo ajustarse al formato tablas requeridas y utilizar de manera anexa información relevante para el GT.

Otras Recomendaciones

87. El GT solicita al Estado Plurinacional de Bolivia que disponga de una **amplia difusión a las presentes observaciones finales** correspondientes al primer agrupamiento de derechos (derecho a la seguridad social, a la salud y a la educación) a nivel nacional, de la sociedad en su conjunto, en particular a las áreas y funcionarios responsables en cumplir con las obligaciones contenidas en los derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador (art. 9, 10 y 13 respectivamente).

El GT recomienda extender a los responsables de los tres poderes estatales, tanto los ministerios sectoriales en el ámbito del poder ejecutivo, a los y las magistradas y operadores judiciales, defensores del pueblo e integrantes de los poderes legislativos, las organizaciones de la sociedad civil y a las y los titulares de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador, es decir los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia. El GT recuerda que la evaluación de los informes fue realizada bajo el principio de devolución, de modo que tal como se estableció por la Asamblea General de la OEA: “el trabajo que supone el informe debe reeditar al Estado que lo presentó el beneficio de acotar la lista de necesidades y definir mejor sus carencias”.³

88. El GT ha realizado su tarea bajo la firme convicción que el proceso de revisión representa un paso más allá del mero reporte sino que configura una herramienta necesaria para el accionar estatal que respete el conjunto de derechos humanos, pero también de enorme utilidad para la ciudadanía. El GT celebra que el Estado Plurinacional de Bolivia se apropie de esta herramienta de monitoreo y potencie en el corto plazo el instrumento, de manera plural, participativa, interjurisdiccional para que cumpla con su misión de garantizar el cumplimiento del Protocolo de derechos económicos, sociales y culturales del sistema interamericano.

89. El GT reitera su disposición del Estado parte para continuar las siguientes etapas en el proceso de monitoreo previsto en el art. 19 del Protocolo de San Salvador, y queda a la espera de la remisión del informe correspondiente al segundo agrupamiento de derechos (derecho al trabajo y derechos sindicales, derecho a la alimentación adecuada, derecho al medio ambiente y derechos culturales) previsto para junio de 2016.

³ “Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el Protocolo de San Salvador” (AG/RES. 2074 -XXXV-O/05)

ANEXO. INDICADORES SELECCIONADOS QUE REQUIEREN INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, A PRESENTAR EN 2019

A continuación se presentan las tablas con los indicadores que no fueron completados por el Estado Plurinacional de Bolivia en este primer proceso. En los casos que el Estado ya ha brindado la información, se omite la denominación del indicador. Con letras mayúsculas se destacan los comentarios para cada indicador incompleto o no presentado, para que se visibilice mejor los indicadores requeridos.

Se espera que los indicadores se complementen en la presentación del próximo informe que incluya estos derechos, es decir, en junio de 2019; si bien, para los casos en que no se logre disponer de la información necesaria, se deberán señalar los avances establecidos así como el período estimado en que se considera posible su cálculo.

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL		
ESTRUCTURALES	PROCESOS	RESULTADOS
RECEPCIÓN DEL DERECHO INFORMACIÓN COMPLETA ENTREGADA.	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de la población asegurada por sistemas contributivos por sexo, etnia/raza y nivel educativo. SE RECOMIENDA AMPLIAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA CONTAR CON LOS DESGLOSES FALTANTES. EN PORCENTAJE, NO EN NUMEROS ABSOLUTOS - Porcentaje de la población cubierta por sistemas no contributivos por sexo, etnia/raza y nivel educativo. SE RECOMIENDA AMPLIAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA CONTAR CON LOS DESGLOSES FALTANTES. EN PORCENTAJE, NO EN NUMEROS ABSOLUTOS 	<ul style="list-style-type: none"> - Tasa de población económicamente activa por sexo, edad, nivel educativo y quintiles de ingresos. SE RECOMIENDA AMPLIAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA CONTAR CON LOS DESGLOSES FALTANTES. CALCULAR TASA - Población cubierta por una pensión o jubilación por grupo de edad, sexo y quintiles de ingresos. SE RECOMIENDA AMPLIAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA CONTAR CON LOS DESGLOSES FALTANTES. EN PORCENTAJE - Número de afiliados cotizantes al sistema de pensiones por sexo, edad y quintiles de ingresos SE RECOMIENDA AMPLIAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA CONTAR CON LOS DESGLOSES FALTANTES. - Total de subsidios al desempleo a personas no afiliadas a los sistemas contributivos. - RESPONDER SI A LA FECHA EXISTEN PROGRAMAS DE APOYO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS; EN SU CASO SEÑALAR LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE RECIBEN EL APOYO Y MONTOS CORRESPONDIENTES.
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS		

<p>- Características y porcentaje de la administración del sistema otorgado a empresas privadas</p> <p>SEÑALAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS QUE RIGEN A LAS EMPRESAS ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SEGUROS SOCIALES DE LARGO PLAZO.</p>	<p>- Porcentaje total de recursos del presupuesto nacional asignados a seguridad social.</p> <p>LA CIFRA PRESENTADA INDICA: "GASTO PÚBLICO SOCIAL", ¿SE REFIERE SÓLO AL GASTO EN SEGURIDAD SOCIAL? TAMBIÉN SE REQUIERE EL % RESPECTO DEL PRESUPUESTO TOTAL.</p> <p>- Disponibilidad y/o utilización de fondos extrapresupuestarios para financiar el sistema de seguridad social -o su déficit.</p> <p>SEÑALAR LOS MONTOS TOTALES Y PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL NACIONAL.</p>	
<p>Señales de progreso. SE SOLICITA RESPONDER ESTA SECCIÓN, SEÑALANDO EN TODO CASO LA INEXISTENCIA DE LO SOLICITADO.</p> <p>-Existencia de estimaciones del costo fiscal de las reformas previsionales</p> <p>-Existencia de estudios y proyectos de reforma de los sistemas de seguridad social con enfoque de género, etnia y raza.</p>		
<p>CAPACIDADES ESTATALES</p>		
<p>- Jerarquía y facultades de los organismos que gestionan la seguridad social.</p> <p>FALTA SEÑALAR LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS EN EL INDICADOR</p>	<p>- Número de pensiones por invalidez otorgadas en el último año por sexo, edad, nacionalidad, condición jurídica (estatuto de refugiado o apátrida), quintiles de ingresos y lugar de residencia.</p> <p>SE RECOMIENDA AMPLIAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA CONTAR CON LOS DESGLOSES FALTANTES.</p> <p>- Total de cotizantes régimen contributivo por edad, sexo, nacionalidad, condición jurídica, categoría ocupacional y rama de actividad.</p> <p>SE RECOMIENDA AMPLIAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA CONTAR CON LOS DESGLOSES FALTANTES Y LAS FUENTES DE INFORMACIÓN.</p> <p>- Tasa de cobertura por accidentes de trabajo por sexo, edad, condición jurídica, categoría ocupacional y rama de actividad.</p> <p>EL INDICADOR SOLICITA LA TASA DE COBERTURA PARA ACCIDENTES LABORALES, NO MONTOS DE PRIMAS DE SEGURO.</p> <p>-Tasa de informalidad laboral.</p> <p>LA CUANTIFICACIÓN SOBRE INFORMALIDAD LABORAL ES FUNDAMENTAL PARA PODER IDENTIFICAR LA MAGNITUD (Y POSIBLES SOLUCIONES), DE LAS CARENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA</p>	<p>- Porcentaje de población sin cobertura en materia de seguridad social, por edad, sexo, por nacionalidad, condición jurídica (estatuto de refugiado o apátrida) condición de actividad, etnia y raza.</p> <p>SE SOLICITA ACLARAR SE INDICA QUE LAS CIFRAS INCLUIDAS CORRESPONDEN A LA POBLACIÓN CON COBERTURA; SIN EMBARGO, NO COINCIDEN CON LO PRESENTADO COMO POBLACIÓN "PROTEGIDA" EN EL CUADRO SUBSIGUIENTE. SE REQUIERE POBLACIÓN SIN COBERTURA. EN PORCENTAJE</p> <p>- Tasa de lesiones profesionales (accidentalidad laboral) por rama de actividad.</p> <p>SE RECOMIENDA AMPLIAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA CONTAR CON LOS DESGLOSES FALTANTES. CALCULAR LA TASA</p>

		POBLACIÓN. SE RECOMIENDA AMPLIAR LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO PARA CAPTAR ESTE FENÓMENO.	
Señales de progreso. SE SOLICITA RESPONDER ESTA SECCIÓN, SEÑALANDO EN TODO CASO LA INEXISTENCIA DE LO SOLICITADO.			
- Cobertura y alcance de políticas públicas de inclusión de los no afiliados al sistema de seguridad social.		- Campañas de formalización del empleo no registrado llevadas a cabo por el Estado. - Campañas oficiales en materia de prevención de riesgos del trabajo.	
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN			
- Requisitos para el acceso al sistema para trabajadores/as rurales. SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR.		- Base de cálculo de las prestaciones de seguridad social para varones y mujeres. SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR.	- Población pensionada (jubilada) por sexo, edad, nivel educativo y por jurisdicciones. SE RECOMIENDA AMPLIAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA CONTAR CON LOS DESGLOSES FALTANTES. - Porcentaje de derecho-habientes que perciben una pensión o subsidio por sexo, por edad, etnia y raza, por jurisdicciones. SE RECOMIENDA AMPLIAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA CONTAR CON LOS DESGLOSES FALTANTES. EN PORCENTAJE - Porcentaje de trabajadores y trabajadoras rurales con cobertura de seguridad social. SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR. EN %
ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN			
- Características y regularidad en la producción de información estadística en materia de seguridad social por sexo, etnia, raza, edad, nacionalidad, condición jurídica (estatuto de refugiado o apátrida) cobertura pública o privada, distribución territorial. SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR.		INFORMACIÓN COMPLETA ENTREGADA.	
Señales de progreso. SE SOLICITA RESPONDER ESTA SECCIÓN, SEÑALANDO EN TODO CASO LA INEXISTENCIA DE LO SOLICITADO.			
- Características, frecuencia, cobertura de campañas oficiales de difusión sobre los derechos a la seguridad social. - Características, frecuencia, cobertura de acciones sindicales de difusión de garantías de derechos de seguridad social a los trabajadores.		- Características de -portales de Internet, cobertura televisiva, ventanillas específicas- de la información brindada sobre derechos a los receptores de programas de cobertura graciabie o no contributiva.	
ACCESO A LA JUSTICIA			

<p>- Existencia de servicios jurídicos gratuitos e integrales de protección del derecho a la seguridad social. SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR, EN SU CASO SEÑALANDO INEXISTENCIA.</p>	<p>- Duración promedio de los casos tramitados por la defensoría oficial sobre pensiones (contributivas y no contributivas). SE RECOMIENDA AMPLIAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA GENERAR EL INDICADOR.</p> <p>-Existencia de organismos estatales de control y fiscalización de entidades privadas encargadas de fondos de salud y/o accidentes/riesgos de trabajo.</p> <p>SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR, EN SU CASO SEÑALANDO INEXISTENCIA.</p> <p>-Número de acciones judiciales presentadas y resueltas por denegatoria de una pensión no contributiva.</p> <p>SE RECOMIENDA AMPLIAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA GENERAR EL INDICADOR.</p> <p>- Políticas de capacitación de jueces y abogados en derecho a la seguridad social. Cobertura temática y alcance.</p> <p>SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR, EN SU CASO SEÑALANDO INEXISTENCIA.</p>	
<p>Señales de progreso. SE SOLICITA RESPONDER ESTA SECCIÓN, SEÑALANDO EN TODO CASO LA INEXISTENCIA DE LO SOLICITADO.</p>	<p>- Cobertura de los servicios de traducción en lenguas indígenas.</p>	

DERECHO A LA SALUD

ESTRUCTURALES	PROCESOS	RESULTADOS
<p>RECEPCIÓN DEL DERECHO</p> <p>INFORMACION PRESENTADA COMPLETA</p>	<p>- Cobertura y jurisdicción de programas que otorgan prioridad a sectores vulnerables para servicios de salud.</p> <p>SE PRESENTAN DATOS SOBRE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD. SE SOLICITA DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMAS PARA LOS SECTORES VULNERABLES.</p> <p>-Porcentajes de adultos mayores de 65 años cubiertos por programas de protección social.</p> <p>SE SOLICITA INCLUIR EL TOTAL DE ADULTOS MAYORES, POR GRUPO DE EDAD, PARA PODER CONOCER EL PORCENTAJE DE COBERTURA. EN %</p> <p>- Cobertura en salud de la población por sexo, edad raza/etnia, quintiles de ingreso. Desagregar por tipo de cobertura (régimen subsidiado, contributivo o mixto).</p> <p>LAS CIFRAS DE COBERTURA PORCENTUAL DE LA SALUD SON FUNDAMENTALES PARA PODER MEDIR AVANCES EN ESTE DERECHO. SE SOLICITA PROPORCIONAR ESTA INFORMACION.</p>	<p>- Esperanza de vida al nacer (urbano/rural y por etnia/raza). SE RECOMIENDA AMPLIAR LOS REGISTROS DE INFORMACION SOBRE MORTALIDAD PARA PODER ESTIMAR EL INDICADOR POR GRUPO INDÍGENA.</p> <p>- Tasa de mortalidad materna por grupo de edad, área geográfica, nivel educativo y quintiles de ingreso.</p> <p>NO SE PRESENTÓ EL INDICADOR; SIN EMBARGO, DE ACUERDO CON EL SITIO SOBRE ODMs DE NACIONES UNIDAS (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx), SE TIENEN LOS SIGUIENTES DATOS: 230 MUERTES MATERNAS POR CADA 100 MIL NACIDOS VIVOS EN 2010 Y 200 EN 2013. SE RECOMIENDA AMPLIAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA CONTAR CON LOS DESGLOSES FALTANTES.</p> <p>LOS SIGUIENTES INDICADORES SE OMITIERON EN LA MATRIZ DEL DOC. METODOLÓGICO, POR ERROR DE FORMATO. SE SOLICITA AGREGAR LA INFORMACIÓN.</p> <p>- Porcentaje de la población con acceso a agua potable.</p>

		- Porcentaje de la población con acceso a servicios de drenaje. EN %
Señales de progreso. SE SOLICITA RESPONDER ESTA SECCIÓN, SEÑALANDO EN TODO CASO LA INEXISTENCIA DE LO SOLICITADO.		
- Número y características de organizaciones de la sociedad civil reconocidas que participan en la promoción y la protección del derecho a la salud. - Reconocimiento de sistemas de salud indígena.	- Estudios de satisfacción de los usuarios sobre la accesibilidad, disponibilidad y calidad de los servicios de salud.	
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS		
- Características, tipos, monto y extensión de incentivos, deducción de impuestos (incentivos fiscales) y subsidios para el sector privado de la salud. RESPONDER SI EXISTE ALGÚN TIPO DE INCENTIVO FISCAL O SUBSIDIO PARA LAS EMPRESAS PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE SALUD. - Características, tipos, monto y extensión de incentivos estatales a la industria farmacéutica privada. RESPONDER SI EXISTE ALGÚN TIPO DE INCENTIVO FISCAL PARA LAS FARMACÉUTICAS PRIVADAS.	- Gasto Público per cápita en atención a la salud. LA INFORMACIÓN ENTREGADA SOBRE GASTO EN SALUD RESPECTO AL PIB, SE COMPARÓ CON LOS DATOS DISPONIBLES DE CEPAL. (http://www.cepal.org/es/publicaciones/panorama-social-de-america-latina-2013), ENCONTRÁNDOSE DIFERENCIAS DE MÁS DE 100% (1.5% PARA 2010, SEGÚN CEPAL). ESTA FUENTE TAMBIÉN PRESENTA UN GASTO PER CÁPITA MÍNIMO (17.5 DÓLARES EN 2010). - Distribución del Gasto en salud por jurisdicciones (estadales, provinciales, locales). SE SOLICITA INCLUIR LA INFORMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO SEGÚN DEPARTAMENTO. - Porcentaje de recursos destinados a la capacitación de recursos humanos en salud. SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR. EN SU CASO, SE RECOMIENDA ABRIR EL RUBRO EN LOS REGISTROS.	INFORMACIÓN ENTREGADA.
CAPACIDADES ESTATALES		
- Alcance, jurisdicción y financiamiento de una política nacional sobre medicamentos esenciales, oncológicos, retrovirales, y medicamentos genéricos. SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR.	- Porcentaje de la población con acceso frecuente a medicamentos esenciales oncológicos, retrovirales y o genéricos por lugar de residencia (urbano/rural) SE RECOMIENDA ESTABLECER LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN NECESARIOS PARA CALCULAR EL INDICADOR. - Porcentaje de servicios de salud de responsabilidad pública subcontratados a compañías privadas u otro tipo de efector SE RECOMIENDA HABILITAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA GENERAR EL INDICADOR.	- Cobertura, extensión, jurisdicción y financiamiento de los programas de atención primaria en salud PRESENTAR LAS CIFRAS DE COBERTURA PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN TOTAL, POR DEPARTAMENTO. - Cobertura de planes de seguro de salud, por sexo, edad y región geográfica en calidad de cotizantes o beneficiarios. SE RECOMIENDA INCLUIR EN LA ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES LA PREGUNTA SOBRE GASTO EN SEGUROS DE SALUD.
Señales de progreso. SE SOLICITA RESPONDER ESTA SECCIÓN, SEÑALANDO EN TODO CASO LA INEXISTENCIA DE LO SOLICITADO.		

	- Existencia de planes/políticas para fortalecer la adaptabilidad cultural de los servicios de salud bajo un enfoque de derechos y étnico.	
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN - Tipo, número, características, jurisdicción, presupuesto y accesibilidad a los servicios de salud mental por distribución territorial. PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL DISPONIBLES POR DEPARTAMENTO.	SE RECOMIENDA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ENCUESTA, O REGISTROS NECESARIOS, QUE PERMITAN ESTIMAR ASPECTOS SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN, PARA CALCULAR CUANDO MENOS LOS SIGUIENTES INDICADORES DE PROCESO: - Porcentaje de mujeres y varones en edad de procrear que usan anticonceptivos. - Estimaciones de abortos inducidos, por edad, lugar de residencia (urbano o rural) y condiciones socioeconómicas de la embarazada. - Estimaciones sobre casos de abortos ilegales, por edad, lugar de residencia (urbano o rural) y condiciones socioeconómicas de la mujer embarazada u otros datos disponibles. - Porcentaje de mujeres embarazadas con test de HIV/SIDA. - Indicadores de lactancia materna exclusiva hasta el cuarto mes y hasta el sexto mes. - Porcentaje de la población que utiliza sistemas indígenas o alternativos de atención de la salud. SE RECOMIENDA INCLUIR EN LA ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES LA PREGUNTA SOBRE GASTO EN ESTE TIPO DE SISTEMAS DE SALUD. - Características, cobertura, presupuesto y jurisdicciones en programas de salud sexual y reproductiva. ADEMÁS DE INFORMAR SOBRE LOS PROGRAMAS EXISTENTES, SE SOLICITA SU COBERTURA POBLACIONAL Y PRESUPUESTOS. - Porcentaje de niños y niñas cubiertos por programas nutricionales. SE SOLICITA PRESENTAR, EN SU CASO, LAS CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMAS NUTRICIONALES Y HABILITAR LOS REGISTROS PARA CONOCER LA CANTIDAD DE POBLACIÓN INFANTIL CUBIERTA CON ESTOS PROGRAMAS.	SE RECOMIENDA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ENCUESTA, O REGISTROS NECESARIOS, QUE PERMITAN ESTIMAR ASPECTOS SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN, PARA CALCULAR CUANDO MENOS LOS SIGUIENTES INDICADORES DE RESULTADO: - Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos entre población adolescente sexualmente activa - Prevalencia del uso de anticonceptivos entre población adulta sexualmente activa. - Porcentaje de mujeres con control prenatal en el primer trimestre. - Porcentaje de discapacitados físicos o mentales que tienen acceso a servicios de instituciones públicas o sociales. SE RECOMIENDA HABILITAR LOS REGISTROS NECESARIOS PARA CALCULAR EL INDICADOR. - Cobertura de vacunación obligatoria. ESTA INFORMACIÓN ES ESENCIAL Y LOS REGISTROS DEBIERAN ESTAR DISPONIBLES EN EL MINISTERIO DE SALUD. EN EL SITIO WEB DE NACIONES UNIDAS SOBRE ODMs SE ENCUENTRA LA COBERTURA DE VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN.
ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN -Características, cobertura (territorial y temática), presupuesto y jurisdicción del sistema estadístico en materia de salud. Formas y frecuencia de actualización de la	NO SE PROPORCIONÓ INFORMACIÓN PARA NINGUNO DE LOS INDICADORES DE ESTA SECCIÓN. SE SOLICITA REALIZAR LA BÚSQUEDA O SISTEMATIZACIÓN PARA	NO SE PROPORCIONÓ INFORMACIÓN PARA NINGUNO DE LOS INDICADORES DE ESTA SECCIÓN. SE RECOMIENDA HABILITAR LOS REGISTROS DE

información, y difusión. SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR.	<p>INFORMAR AL RESPECTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de efectores de salud con protocolos de confidencialidad de la información sobre su salud. - Cobertura de acciones o campañas de difusión por parte del estado de información sobre políticas de salud sexual y reproductiva. - Cobertura de acciones o campañas de asesoramiento a mujeres embarazadas sobre formas de transmisión madre-hijo de HIV/SIDA. - Cobertura de acciones de información y programas de difusión sobre los efectos del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. - Distribución geográfica, jurisdiccional y étnica de servicios de traducción en los efectores de salud a otros idiomas hablados en el país. 	<p>INFORMACIÓN PARA GENERAR LOS SIGUIENTES INDICADORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de niños nacidos con malformaciones fetales por consumo de alcohol y otro tipo de drogas. - Subregistro de nacimientos (porcentaje).
Señales de progreso. SE SOLICITA RESPONDER ESTA SECCIÓN, SEÑALANDO EN TODO CASO LA INEXISTENCIA DE LO SOLICITADO.	<ul style="list-style-type: none"> - Existencia de mecanismos permanentes participación ciudadana para la elaboración de recomendaciones en el diseño e implementación de políticas de salud. 	
ACCESO A LA JUSTICIA		
<p>-Existencia de acciones constitucionales (amparos, acciones de protección, tutela).</p> <p>SE RECOMIENDA HABILITAR LOS REGISTROS NECESARIOS PARA CALCULAR EL INDICADOR.</p> <p>-Existencia de servicios jurídicos gratuitos e integrales de protección del derecho a la salud.</p> <p>LA CARENCIA DE RESPUESTA, ¿DEBE INTERPRETARSE COMO QUE ESTE TIPO DE SERVICIOS NO EXISTE?</p> <p>-Aplicación de garantías procesales en los procedimientos judiciales en materia de salud: i) independencia tribunal; ii) plazo razonable; iii) igualdad de armas; iv) cosa juzgada; v) vías recursivas de sentencias en instancias superiores.</p> <p>LA CARENCIA DE RESPUESTA, ¿DEBE INTERPRETARSE COMO QUE ESTE TIPO DE GARANTÍAS NO EXISTE?</p>	<p>NO SE PROPORCIONÓ INFORMACIÓN PARA NINGUNO DE LOS INDICADORES DE ESTA SECCIÓN. SE RECOMIENDA HABILITAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA GENERAR LOS SIGUIENTES INDICADORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de decisiones judiciales que ha hecho lugar a garantías en salud en general y en casos específicos (salud sexual y reproductiva, personas con HIV-SIDA; entre otras). - Número de denuncias relativas al derecho a la salud recibidas, investigadas y resueltas por las instituciones nacionales de derechos humanos competentes en el país -Políticas de capacitación de jueces y abogados en materia de derecho a la salud. 	
Señales de progreso. SE SOLICITA RESPONDER ESTA SECCIÓN, SEÑALANDO EN TODO CASO LA INEXISTENCIA DE LO SOLICITADO.	<p>Características y cobertura de los medios que difunden información a las personas de sus derechos en relación con la salud. Cobertura de los servicios de traducción en lenguas indígenas.</p>	

DERECHO A LA EDUCACIÓN

ESTRUCTURALES	PROCESOS	RESULTADOS
RECEPCIÓN DEL DERECHO <ul style="list-style-type: none"> - Ratificación de tratados internacionales que reconocen el derecho a la educación: vii) Metas educativas 2021 SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INCISO DEL INDICADOR. - Obligatoriedad escolar: rangos de edad y duración. SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR. - Normas que regulan el derecho a la gratuidad educativa por nivel de escolaridad. SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nivel de desempeño de los estudiantes según el sistema nacional de evaluación de la educación. SE RECOMIENDA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ENCUESTA PARA CALCULAR EL INDICADOR. - Cantidad de días de clase según la norma. SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR. - Cobertura de programas y acciones concretas en todos los niveles educativos para el acceso y permanencia en el sistema educativo de sectores vulnerables por zona de residencia (urbano/rural). SE SOLICITA DETALLAR, CUANDO MENOS, LOS PROGRAMAS DE BECAS POR NIVEL EDUCATIVO. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tasa neta de cobertura educativa por niveles de enseñanza (educación primera infancia hasta EDJA). SE SOLICITA PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN MEDIA Y MEDIA SUPERIOR. CALCULAR TASA - Tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años de edad, por sexo, etnia, raza, grupos de edad, área geográfica y quintiles de ingreso. SE RECOMIENDA HABILITAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA GENERAR LOS DESGLOSES FALTANTES.
Señales de progreso. SE SOLICITA RESPONDER ESTA SECCIÓN, SEÑALANDO EN TODO CASO LA INEXISTENCIA DE LO SOLICITADO.		
<ul style="list-style-type: none"> - Tipo y características de la cobertura: criterios de universalidad, o de focalización o por lógicas de subsidio a la demanda en educación. - Número, tipo, características de organizaciones de la sociedad civil registradas que participan en la promoción, implementación y la protección del derecho a la educación. 		
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS		
<ul style="list-style-type: none"> - Fuentes de financiamiento del sector educación. SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR. - Leyes y medidas específicas que dispongan formas de financiamiento de la gratuidad de la educación obligatoria. SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR. - Monto y extensión de incentivos, deducción de impuestos (incentivos fiscales) y subsidios para el sector privado de la educación por nivel de instrucción. RESPONDER SI EXISTE ALGÚN TIPO DE INCENTIVO FISCAL O SUBSIDIO PARA EMPRESAS PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE EDUCACIÓN O PARA LOS USUARIOS DE ESTE SECTOR. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gasto público en educación por niveles educativos. SE RECOMIENDA HABILITAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA GENERAR EL INDICADOR. - Porcentaje de inversión en I+D en la región con respecto al PIB. SE RECOMIENDA HABILITAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA GENERAR EL INDICADOR. - Gasto privado en educación, como porcentaje del PIB. SE RECOMIENDA HABILITAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA GENERAR EL INDICADOR. - Distribución del Gasto por jurisdicciones (estadales, locales, provinciales). SE RECOMIENDA HABILITAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA GENERAR EL INDICADOR. 	
Señales de progreso. SE SOLICITA RESPONDER ESTA SECCIÓN, SEÑALANDO EN TODO CASO LA INEXISTENCIA DE LO SOLICITADO.		

	- Avances específicos en el cumplimiento de la gratuidad, universalidad y obligatoriedad y de las metas educativas de los Estados.	
CAPACIDADES ESTATALES		
NO SE PROPORCIONÓ INFORMACIÓN PARA NINGUNO DE LOS INDICADORES DE ESTA SECCIÓN. SE SOLICITA REALIZAR LA BÚSQUEDA O SISTEMATIZACIÓN PARA INFORMAR AL RESPECTO: - Porcentaje de escuelas que participan en programas de evaluación de contenidos y calidad educativa. - Participación del sector oficial en la matrícula por nivel educativo (desde Primera Infancia a educación superior).	- Oferta de establecimientos educativos públicos de acuerdo a niveles. SE SOLICITA DESAGREGAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA DE ACUERDO A LOS NIVELES EDUCATIVOS.	- Nivel medio educativo de la población, por años de escolaridad y desagregado por sexo. SE SOLICITA DESAGREGAR LA INFORMACIÓN POR SEXO. - Porcentaje de niños de 0 a 6 años que participan en programas educativos. SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR. - Porcentaje de escuelas y de docentes que participan en programas de formación continua y de innovación educativa. EL INFORME PRESENTA INFORMACIÓN ÚNICAMENTE SOBRE LOS "Telecentros Educativos Comunitarios". EXISTEN OTROS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA? CUAL ES SU COBERTURA?
Señales de progreso. SE SOLICITA RESPONDER ESTA SECCIÓN, SEÑALANDO EN TODO CASO LA INEXISTENCIA DE LO SOLICITADO.		
	- Existencia de Planes con metas específicas de expansión del acceso a la educación secundaria cuando la misma no es obligatoria.	
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN		
INFORMACIÓN COMPLETA ENTREGADA.	NO SE PROPORCIONÓ INFORMACIÓN PARA NINGUNO DE LOS INDICADORES DE ESTA SECCIÓN. SE SOLICITA REALIZAR LA BÚSQUEDA O SISTEMATIZACIÓN PARA INFORMAR AL RESPECTO: - Porcentaje de familias con dificultades socioeconómicas que reciben apoyo para garantizar la asistencia habitual de sus hijos a las escuelas. - Porcentaje de becas a alumnos/as de todos los niveles educativos. - Porcentaje de educadores que tienen el título específico de educación inicial. - Porcentaje de matrícula de primaria de tiempo completo o doble turno por gestión (pública o privada). - Tiempo semanal dedicado a la educación artística y a la educación física en las escuelas por nivel educativo. - Cantidad de computadores en la escuela por alumno para tareas de aprendizaje.	- Relación entre el número de niñas y el de niños según nivel de enseñanza, por etnia/raza y área geográfica. SE SOLICITA CALCULAR EL INDICADOR. - Porcentaje de alumnado de minorías étnicas, poblaciones originarias y afrodescendientes que realiza estudios de educación técnico- profesional (ETP) y universitarios. SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR. - Porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en escuelas regulares del sistema educativo SE RECOMIENDA HABILITAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA GENERAR EL INDICADOR.
Señales de progreso. SE SOLICITA RESPONDER ESTA SECCIÓN, SEÑALANDO EN TODO CASO LA INEXISTENCIA DE LO SOLICITADO.		

	- Frecuencia y resultados en la actualización de los contenidos básicos de la educación que incorpore el enfoque de género, étnico, de derechos humanos y ciudadanía en los currículos de las diferentes etapas educativas.	
ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN		
- Características, cobertura (territorial y temática), presupuesto y jurisdicción del sistema estadístico en materia educativa. SE SOLICITA LA RESPUESTA A ESTE INDICADOR.	-Número de proyectos presentados y aprobados en los que diferentes sectores sociales participan y que se aplican de forma integrada al diseño de la educación. EL INFORME SEÑALA EL PROCESO PARTICIPATIVO SEGUIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "Plan de Educación en Derechos Humanos". SE SOLICITA CONOCER SI EXISTEN PROYECTOS EDUCATIVOS PARTICIPATIVOS ESPECÍFICOS QUE SE ESTÉN APLICANDO.	
Señales de Progreso. SE SOLICITA RESPONDER ESTA SECCIÓN, SEÑALANDO EN TODO CASO LA INEXISTENCIA DE LO SOLICITADO.		
- Características, cobertura y periodicidad de campañas de difusión del derecho a la educación. - Características, cobertura y periodicidad de campañas de difusión para la erradicación del analfabetismo.		
ACCESO A LA JUSTICIA		
LA CARENCIA DE RESPUESTA A TODOS LOS INDICADORES SIGUIENTES, ¿DEBE INTERPRETARSE COMO QUE ESTE TIPO DE INSTANCIAS, ACCIONES O SERVICIOS NO EXISTE? - Existencia de instancias contenciosas administrativas. - Existencia de acciones constitucionales (amparos, acciones de protección, tutela) - Existencia de servicios jurídicos gratuitos e integrales de protección del derecho a la educación. - Existencia de oficinas públicas de mediación o conciliación para resolver cuestiones vinculadas con educación. - Aplicación de garantías procesales en los procedimientos judiciales en materia de educación: i) independencia e imparcialidad del tribunal; ii) plazo razonable; iii) igualdad de armas; iv) cosa juzgada; v) vías recursivas de sentencias en instancias superiores. LA CARENCIA DE RESPUESTA, ¿DEBE INTERPRETARSE COMO QUE ESTE TIPO DE GARANTÍAS NO EXISTE?	NO SE PROPORCIONÓ INFORMACIÓN PARA NINGUNO DE LOS INDICADORES DE ESTA SECCIÓN. SE RECOMIENDA HABILITAR LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN PARA GENERAR LOS SIGUIENTES INDICADORES: - Número de decisiones judiciales que ha hecho lugar a garantías en educación. - Número de denuncias relativas al derecho a la educación, recibidas, investigadas y resueltas por la instituciones nacionales de derechos humanos y/o educativas competentes en el país. - Políticas de capacitación de jueces y abogados en derecho a la educación. Cobertura temática y alcance.	